

# La elección de instituciones electorales en un régimen autoritario.

## Una aplicación a México

RODRIGO SALAZAR ELENA

### RESUMEN

El artículo discute los supuestos básicos de la teoría de la elección racional y su aplicación en el caso del diseño de las instituciones electorales del autoritarismo mexicano. Desde esa perspectiva se aborda la evolución histórica de las reformas electorales de México en el periodo comprendido entre 1963 y 1997 a través de distintos modelos de interacción de los actores políticos.

### ABSTRACT

This article discusses the basic elements of rational choice theory and their application to the design of electoral institutions in Mexican authoritarian regime. Since this point of view, it studies the historic evolution of the electoral reforms of México in the period between 1963 and 1997, through different models of interaction of the politics actors.

### SISTEMAS ELECTORALES, AUTORITARISMO Y DEMOCRATIZACIÓN

**H**asta antes de la llamada “tercera ola” de democratizaciones, varios regímenes autoritarios rechazaban explícitamente la competencia electoral entre partidos políticos, ya sea por considerar que la población no estaba preparada para ella, o alegando que existían diseños institucionales o alternativas en las condiciones socio-económicas que representaban una democracia “verdadera”, frente al “formalismo” de la democracia electoral. Para inicios del siglo XXI, la situación es distinta. No sólo porque la proporción de regímenes democrático-electorales es mucho mayor que en la década de los sesenta, sino porque los propios regímenes autoritarios se han vuelto más sofisticados, por así decirlo, adoptando entre sus procedimientos, instituciones propias de la democracia, notoriamente la celebración de elecciones con la participación de partidos políticos independientes.

Así, mientras que en 1974 alrededor de seis regímenes autoritarios contemplaban alguna forma de seudo competencia electoral, hoy en día entre un cuarto y un tercio de los sistemas políticos tiene regímenes autoritarios que se valen de ese mecanismo. (Diamond, 2002: 27) Según mis propios cálculos, para inicios del 2002 existían 71 regímenes no democráticos; en 60 de ellos la población es convocada a sufragar, y de estos últimos, en 42 la oposición tenía derecho a organizarse y presentarse a elecciones. Las elecciones de éstos, a diferencia de las elecciones en los regímenes genuinamente democráticos, carecen de alguno o varios de los diversos mecanismos que las hacen “libres y justas”, de tal forma que no existe incertidumbre *ex ante* o la posibilidad efectiva de que el partido en el poder pierda en el conteo de votos; irreversibilidad *ex post* o la seguridad de que aquel que gane la elección, aunque provenga de la oposición, tomará posesión del cargo, y/o la repetición periódica de procesos electorales con las dos características anteriores (Przeworski *et al*, 2000: 16-8). Como lo desarrolla Andreas Schedler (2002: 47): “Mientras que la democracia es ‘un sistema en el que los partidos pierden elecciones’, el autoritarismo electoral es un sistema en el que los partidos de *oposición* pierden elecciones”.

Es evidente la razón por la cual la élite autoritaria corre el riesgo de aceptar competidores que eventualmente pueden reunir suficientes votos como para crearle un problema. Ya que siempre es mejor, en términos de imagen hacia la comunidad internacional, un gobierno levantado sobre los votos que sobre las armas, sugiero que tal factor no es el más importante,<sup>1</sup> y que estos regímenes ven en las elecciones una forma eficiente de controlar el descontento.

En los regímenes autoritarios los gobiernos carecen de incentivos para que sus políticas respondan a las demandas de la población, dada la ausencia de sanciones por la vía electoral. Sin mecanismos para recibir señales de las preferencias sociales y reaccionar a ellas, estos regímenes son altamente dependientes de su desempeño. Cuando éste es malo o exige muchos sacrificios, para la población la única forma de obtener un cambio en las políticas es aplicándolo por completo al régimen (Linz y Ste-

<sup>1</sup> Por otro lado, una revisión de los reportes de las misiones observadoras de elecciones de la OSCE será suficiente para convencer a cualquiera de que la comunidad internacional no confunde la mera celebración de elecciones con democracia plena. Véase *Office for Democratic Institutions and Human Rights* (ODIHR), (varias fechas).



pan, 1994: 49). Por eso, eventos como las huelgas y las manifestaciones antigubernamentales, que en una democracia representan desacuerdo, en el autoritarismo van más allá y ponen en peligro la estabilidad del régimen (Przeworski *et al*, 2000: 212-3).

Ahora bien, no es descabellado asumir en las coaliciones autoritarias la capacidad relativa para estimar cuándo sus medidas provocarán alguna forma de protesta organizada, así como la sensatez para recurrir a la fuerza sólo en última instancia. Esta capacidad les permite adelantarse a los eventos abriendo espacios a los grupos de oposición; *i.e.*, liberalizando. De tal manera que la liberalización es el intento de las elites autoritarias para incrementar la estabilidad del régimen, entendiendo por estabilidad la capacidad previsible del régimen, en un momento dado, para durar en el tiempo (Morlino, 1991: 533). Con la liberalización, la coalición autoritaria no se vuelve más sensible a las demandas de la población, sino que adapta algunas características del régimen en respuesta a escenarios de crisis (actuales o futuros) para garantizarse una mayor probabilidad de permanencia futura.<sup>2</sup>

Incluir a la oposición en una pseudo competencia electoral estabiliza al régimen autoritario. Con respecto a la población, el régimen obtiene no tanto apoyo o lealtad positivos sino la ausencia de oposición "suficiente". Cuando el *status quo* se aproxima al régimen alternativo (democracia), serán menos las personas dispuestas a realizar los esfuerzos organizativos necesarios para obtener un cambio de régimen. Para buena parte de la población, la posibilidad de expresar descontento votando por candidatos de oposición real y llevándolos incluso a puestos de elección, la disuadirá de exponer su seguridad física en manifestaciones o huelgas. Los recalcitrantes enfrentarán un problema de acción colectiva en la medida en que ellos solos tendrían que cargar con los costos de obtener el bien público (el cambio de régimen), y cuando su número es suficientemente bajo, se verán obligados a hacer lo que los demás hacen de grado, aceptar el marco existente (Hardin, 1989: 109, 113-9).

<sup>2</sup> La liberalización en general consiste en acciones destinadas a "abrir ciertos espacios para la acción individual y colectiva" (O'Donnell y Schmitter, 1994: 23), y muchas veces se limita a un "clima" de mayor libertad para perseguir los intereses propios o expresar críticas. En algunos casos se llegará al refuerzo de ciertas garantías legales. En otros, la oposición será no sólo tolerada, sino reconocida. Aquí me refiero en especial a esta última forma, la más avanzada, de liberalización.

La liberalización no es necesariamente una medida para convencer a la población de que la élite autoritaria tiene derecho a gobernar (incrementando la legitimidad), pero sí lo es para apelar al conformismo. Con ella, se espera que una porción considerable de la población será indiferente entre el mantenimiento del autoritarismo electoral y mayores avances en democratización.

Frente a los grupos opositores ya organizados y orientados hacia la competencia política, la liberalización representa la transformación de un conflicto de tipo *político-ideológico* sobre la naturaleza del régimen a un conflicto de tipo *económico* sobre la "división de los beneficios". Los conflictos del primer tipo son difíciles de resolver porque la opción preferida por una parte es la opción menos preferida por la otra, mientras que los conflictos del segundo tipo versan sobre los intereses y se resuelven distribuyendo recursos de poder. (Elster, Offe y Preuss, 1998: 249-51). Existe, por otro lado, una distribución de recursos de poder tal que la hegemonía de la coalición autoritaria se sostiene.

La coalición autoritaria obtiene de la oposición la contención del descontento y la estabilidad de su dominación, a cambio de espacios limitados. Por su parte, la oposición obtiene la oportunidad de que el acuerdo liberalizador se convierta no en una fórmula estable, sino en una etapa transitoria del cambio de régimen (Colomer, 2000: cap. 2).<sup>3</sup> Aunque los objetivos de ambos actores son encontrados, entienden que cooperando en el acuerdo liberalizador cada uno obtiene más que lo que obtendrían si no cooperaran en absoluto.<sup>4</sup> La modalidad del acuerdo institucional resultante depende de los recursos con los que cuenta cada actor.

<sup>3</sup> Como lo señala Juan Linz (1982: 137): "Participar en las elecciones definidas como políticas, contribuye inevitablemente a legitimar el sistema. Sin embargo, es tentador contribuir a la transición pacífica hacia un sistema democrático, competitivo o semicompetitivo, gracias a un proceso de liberalización... Rechazar en forma total las ocasiones ofrecidas, no entrar en competencia, inclusive sin esperanza, con el partido dirigente, es una opción difícil para quienes esperan un regreso a las prácticas políticas pluralistas".

<sup>4</sup> Este entendimiento no siempre es posible. Por un lado, la coalición autoritaria debe percibir que el riesgo producido por la crisis es muy alto y/o que la probabilidad de que la oposición obtenga un triunfo electoral es relativamente baja. Por el otro, la oposición debe ser hasta cierto punto adversa al riesgo, poco dispuesta a probar la proclividad de la coalición autoritaria, a recurrir a la fuerza, si no acepta participar en los términos que se le ofrecen. Cuando sólo existen actores de oposición menos adversos al riesgo, el acuerdo es difícil porque éstos pedirán concesiones tan elevadas que la coalición autoritaria terminará prefiriendo la represión.



Para ilustrar este punto, me referiré al diseño de los sistemas electorales usados para la composición de los órganos legislativos. Como un sistema electoral es el “conjunto de métodos usados para convertir los votos de los ciudadanos en escaños representativos” (Lijphart, 1994: 1), su manipulación permite incidir en la representación de acuerdo con ciertos objetivos. Los sistemas electorales pueden ser mayoritarios o proporcionales. Los primeros hacen posible que un partido que obtenga sólo una mayoría simple de votos alcance la mayoría absoluta de escaños (mayorías artificiales), mientras que en un sistema electoral proporcional lo más probable es que un partido únicamente alcance la mayoría absoluta de escaños con una mayoría absoluta de votos (Nohlen, 1998: 98-9). Los sistemas mayoritarios tienden a favorecer a los partidos más grandes a costa de la representación de los más pequeños. En especial, dos elementos de los sistemas electorales se prestan a diseño con resultados más o menos predecibles:

1. La *magnitud de la circunscripción*; es decir, el número de escaños que se distribuyen en la circunscripción.
2. La *fórmula electoral* o la operación matemática que se utiliza para determinar, en el nivel de la circunscripción, el número de escaños que recibe cada partido en relación con los votos que obtuvo.

El carácter mayoritario o proporcional de los sistemas electorales, en conjunto, depende de la combinación de sus diversos elementos. En términos generales, son mayoritarios cuando la magnitud de sus circunscripciones es baja o cuando la fórmula es mayoritaria (sea por mayoría absoluta o por mayoría relativa), mientras que son proporcionales cuando la magnitud de las circunscripciones es alta y la fórmula de asignación es proporcional en cualquiera de sus variantes (Cox y McCubbins, 2001: 42).

Los regímenes autoritarios tienen una preferencia por los sistemas electorales mayoritarios.<sup>5</sup> La explicación de esta preferencia es que la coalición autoritaria, entre otros mecanismos de protección, se valdrá de sistemas electorales que eviten la posibilidad que la oposición tenga capacidad de veto sobre las políticas públicas, si la forma de gobierno es presidencial, o sobre la conformación del gobierno, si es parlamentaria. La siste-

<sup>5</sup> De los 42 regímenes autoritarios electorales que mencioné anteriormente, 36 utilizan algún sistema electoral mayoritario. Los seis sistemas que son proporcionales representan el 14.3 por ciento de ese universo; mientras que el 40.5 por ciento de los regímenes democráticos utiliza sistemas proporcionales.

mática electoral es, pues, el mecanismo institucional por el cual la coalición autoritaria evita el gobierno dividido.<sup>6</sup>

Ahora bien, cuando la elite en el poder decide que es en su conveniencia incentivar la participación opositora, recurrirá al diseño de sistemas electorales mayoritarios con *elementos proporcionales*. De entre los posibles diseños que consiguen este resultado, destacan tres:

1. La aplicación de una fórmula proporcional en circunscripciones con magnitud de cinco escaños o menos.
2. La división de la composición del parlamento en dos niveles: uno mayoritario y otro proporcional, asignando a cada partido escaños en el nivel proporcional con independencia del nivel mayoritario.<sup>7</sup>
3. Disposiciones *ad hoc* que reservan un número determinado de escaños para ser distribuidos exclusivamente entre los diversos partidos de oposición.

El partido más grande se ve favorecido mediante la sobre representación, haciendo posible la formación de mayorías artificiales, pero los partidos menos fuertes no se ven apabullados como en el caso de los sistemas más mayoritarios.

La estructura que lleva de la cooperación entre gobierno y oposición al diseño de un sistema electoral específico, se asemeja, como muestra el cuadro 1, al juego de la batalla de los sexos.

“Mayoritario” y “RP” significan la elección por cada actor de un sistema electoral mayoritario y proporcional, respectivamente. La literal de la izquierda representa el pago que obtiene la coalición autoritaria y la de la derecha el pago obtenido por la oposición. Ambos actores obtienen mayores beneficios coordinando su elección que optando por una distinta a la del otro, eliminando así, la posibilidad de un acuerdo. Sin embargo, también entienden que, en la medida en que éste prevalezca, el resultado de la coordinación favorecerá sistemáticamente a uno de los actores a costa

<sup>6</sup> A esto se refiere en parte Colomer (2001: 178) cuando dice: “Un régimen autoritario es siempre un gobierno unificado y altamente concentrado”.

<sup>7</sup> Este sistema electoral se conoce como “segmentado”. Cuando los escaños que cada partido recibe en el nivel proporcional dependen del número de escaños que obtuvo en el nivel mayoritario (como en Alemania) el sistema es muy proporcional. Para una descripción de los sistemas electorales de composición mixta véase Shugart y Wattenberg (2001).



CUADRO 1  
INTERACCIÓN ENTRE GOBIERNO Y OPOSICIÓN

		Oposición	
		Mayoritario	RP
Coalición autoritaria	Mayoritario	(a,b)	(0,0)
	RP	(0,0)	(b,a)

en donde  $a > b > 0$

del otro. Finalmente, una vez alcanzado el mismo, ningún actor podrá modificarlo unilateralmente sin la anuencia del otro. <sup>c</sup>

Los recursos políticos de cada actor determinan el resultado concreto de la coordinación.<sup>8</sup> Dos extremos de la correlación de fuerzas representan escenarios ajenos a la liberalización. En uno, el partido en el gobierno se vale de un sistema electoral mayoritario para consolidar su posición (convirtiendo el predominio en hegemonía), y la oposición, que no “juega”, no tiene más remedio que aceptar el marco institucional adverso o abandonar la arena electoral. En el otro extremo, la coalición autoritaria es la que no juega y prevalece la opción preferida por los grupos opositores, sea porque el régimen se colapsa y el partido en el poder desaparece o sea porque dicho partido queda en una posición electoral débil, previsible, que considera que un sistema proporcional conviene a sus intereses. Cada extremo corresponde a situaciones de consolidación de un régimen autoritario y de transición democrática, respectivamente.

Las situaciones intermedias corresponden a los escenarios de liberalización. En éstos, la coalición autoritaria ofrece un sistema mayoritario con elementos proporcionales, de tal forma que la oposición obtiene un pago  $b'$  tal que  $a > b' > b$ . Esto hace que la coordinación en mayoritario / mayoritario responda a los intereses de ambos actores.

Cuando la oposición es muy débil, la interacción será implícita por lo que la coalición autoritaria diseñará el sistema electoral que considere más adecuado a sus propios intereses, pero tomando en cuenta los de su

<sup>8</sup> Para una exposición sobre la relación entre instituciones y relaciones de poder desiguales véase Knight (1992); para la interacción entre recursos de los actores y negociación en el diseño de instituciones véase Negretto (2001). Me he basado en ambas fuentes para la discusión que sigue.

contraparte, de tal forma que el sistema ofrecido será el “mínimo aceptable” para la oposición, la cual, sin recursos para obtener algo mejor, lo aceptará. En esta hipótesis, el valor de  $b'$  será más bien cercano al de  $b$ .

Si la oposición, por el contrario, dispone de recursos suficientes para ejercer veto sobre la propuesta de la coalición autoritaria, el diseño será entonces el producto de una negociación. El diseño propuesto sufrirá modificaciones y el valor de  $b'$  tenderá a aproximarse al de  $a$ . Con “recursos suficientes” en particular existen dos:

- *Recursos organizativos.* El o los partidos de oposición tienen la capacidad de movilizar grandes contingentes en apoyo a sus demandas. En momentos de crisis, la oposición puede amenazar con llevar a cabo movilizaciones o intercambiar su cese por diseños institucionales más favorables. Se requiere una capacidad organizativa amplia para ordenar tanto el inicio como el fin de dichas movilizaciones.
- *Recursos institucionales.* Cuando previamente existen instancias institucionales que reparten el poder (parlamentos, gobiernos locales), el o los partidos de oposición pueden ocupar espacios que hagan necesaria su anuencia explícita para que las reformas procedan. La medida en que las instancias institucionales otorguen a la oposición esta capacidad de veto es una función de su fuerza electoral, a diferencia de los recursos organizativos, que compensan la debilidad electoral de la oposición previsible en contextos autoritarios.

Existen además elementos exógenos que también inciden en la fuerza negociadora de la oposición. Uno de ellos es el grado en que la oposición se presenta como actor unificado. Si la oposición está disgregada en facciones, y a la coalición autoritaria le basta la anuencia de una de las facciones, puede negociar por separado con una de ellas un diseño institucional que resulte en un valor de  $b'$  inferior al que se habría podido obtener negociando en conjunto.

El otro factor es la impaciencia de la coalición autoritaria. En ocasiones, es posible que prefiera llegar a un acuerdo lo antes posible, *v.gr.*, para evitar con el acuerdo un suceso crítico que sin él se presentaría. Así, a medida que pasa el tiempo el valor de  $a$  disminuye para la coalición autoritaria, de tal forma que estará dispuesta a hacer concesiones adicionales si con ellas garantiza que el acuerdo se dará pronto. Este recurso puede



finalmente ser una trampa, si el tiempo transcurrido es demasiado, o el suceso crítico ocurre sin llegar a un acuerdo, la impaciencia puede convertirse en indiferencia o incluso en preferencia por soluciones represivas.

La longevidad y la imaginación del régimen autoritario asociado con la hegemonía en México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), permiten un ejercicio de comparación histórica para poner a prueba este modelo.

Desde 1963, el país pasó por seis reformas al sistema electoral usado para la integración de la cámara baja. En todas ellas se aplicaron diversas variables de composición mixta, siempre con una parte de la cámara electa por mayoría relativa en circunscripciones uninominales (CUNS), que llamaré nivel nominal, y otra con distintas formas de representación proporcional, en adelante nivel de lista. El nivel nominal, en todos los casos, representaba el dispositivo de seguridad para el PRI, en el que cada apertura de espacios para la oposición era respaldada por el efecto favorable a los partidos grandes propio de la fórmula de mayoría relativa en CUNS (Lijphart, 1994: 139-43), dejando de lado la cuestión del fraude.

El diseño específico que adquiriría cada combinación dependió tanto de los objetivos del PRI-gobierno<sup>9</sup> como de la fuerza relativa de los actores de oposición. Mientras la oposición mostraba una carencia de recursos que permitía a la coalición autoritaria imponer su diseño preferido, los sistemas electorales resultantes respondieron al objetivo, primero, de impulsar la representación opositora a pesar de su debilidad electoral, y después, de proteger al partido hegemónico contra cambios bruscos en las preferencias del electorado. La oposición tenía garantizado un número mínimo de escaños, pero también tenía la seguridad de que no estaría en capacidad de evitar que el PRI se llevara por lo menos la mayoría absoluta de los escaños.

Después de 1988, diversos sucesos en los terrenos electoral, social y económico dieron a la oposición una mayor capacidad negociadora en la forma de veto sobre los sistemas electorales promovidos por la coalición autoritaria. La interacción entre vetos mutuos y alternativas propuestas resultó en transformaciones en el sistema electoral que en pasos sucesivos limitaron la capacidad del partido más grande para convertir una mayo-

<sup>9</sup> Para los efectos de este trabajo, omitiremos la división entre "duros" y "blandos" al interior de la coalición autoritaria. Durante todas las reformas el PRI y el gobierno sostuvieron posiciones unificadas, con excepciones raras y menores. La existencia de un sector "duro", de ser cierta, servía al gobierno para justificar ante la oposición la imposibilidad de ofrecer reformas de mayor alcance (Molinar, 1996: 140).

ría simple de votos en una mayoría absoluta de escaños. En lo que resta de este documento, se describirá el proceso al que se hace referencia.

## REFORMAS DE 1963, 1977 Y 1988. MODELO DE INTERACCIÓN IMPLÍCITA

Las reformas al sistema electoral de 1963 y 1977, fueron pensadas para que actores de oposición orientados a la competencia electoral, aunque débiles, accedieran a un mínimo de escaños tal, que garantizara su presencia permanente en las instancias representativas del régimen autoritario.

El objetivo de la reforma de 1963, fue promover la participación continuada de un actor ya existente, más que incorporar a uno nuevo. La dirección nacional del Partido Acción Nacional (PAN) comenzaba a adoptar actitudes desleales instruyendo sin éxito, en 1958, y otra vez en 1961, a los escasos candidatos electos de su partido para que no tomaran posesión de sus escaños. Aunque las razones aducidas se relacionaban con el fraude y la inequidad, más a fondo, el sistema de mayoría relativa en CUNs favorecía a tal grado al PRI, que los demás partidos tenían problemas para reclutar candidatos con muy escasas oportunidades de éxito (Nacif, 1996: 14-5). En las elecciones de 1961, el PAN presentó candidaturas en el 55 por ciento de las CUNs y en 34 el PRI no tuvo adversarios.<sup>10</sup> La fuerza creciente de las posiciones desleales dentro del PAN era un problema no tanto en sí como en sus consecuencias para el sistema. En el auge del "desarrollo estabilizador", este partido estaba llamado a canalizar políticamente a una oposición en la sociedad cuyos motivos de descontento eran necesariamente ideológicos. Una oposición por principio que, si no podía expresarse en las instancias representativas, se vería tentada a la acción política directa. Si el PAN se movía hacia posiciones más radicales, al menos parte de su clientela electoral estaría dispuesta a seguirlo en aventuras más arriesgadas, ante la ausencia de opciones electorales para expresar su desacuerdo.

La reforma al sistema electoral de 1962-63 fue ofrecida por Díaz Ordaz, entonces secretario de Gobernación, a Christlieb Ibarrola, dirigente del PAN (Lujambio y Marván, 1997: 59-63). Aunque este partido se había manifestado por la inclusión del principio de proporcionalidad, es difícil con-

<sup>10</sup> Cálculos propios con base en datos del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.



cluir de eso, como se ha hecho, que el propio Christlieb diseñó el sistema electoral. Frente a la introducción de elementos proporcionales, tanto el predominio del componente mayoritario como los dispositivos para evitar un crecimiento "imprudente" de la oposición, hacen que para el PAN dicho sistema fuera una alternativa mejor que la prevaleciente, pero la peor de las reformas imaginables.

Para 1977, la coalición autoritaria se proponía dar una solución a los efectos de la represión de los años sesenta. La preocupación consistía en la ausencia de mecanismos electorales para la expresión del descontento por parte de los intereses que serían lastimados por la Alianza para la Producción. Estos grupos bien podrían, a falta de opciones, apoyar a los activistas radicales provenientes del movimiento estudiantil de 1968, no cooptados por la apertura de Echeverría, los cuales estaban dedicados al sindicalismo independiente, la organización de las masas en las colonias urbanas populares y la guerrilla urbana. (Zermeno, 1996: 16-20). De este modo, se concedió el registro al Partido Comunista de México (PCM).

El PCM había estado muy ligado a Lombardo Toledano y a través suyo, a los trabajos de formación del Partido de la Revolución Mexicana (Garrido, 1982). En 1946, apoyó la candidatura presidencial de Miguel Alemán. Durante el movimiento estudiantil de 1968, había respaldado a los sectores del Consejo Nacional de Huelga proclives al diálogo con el gobierno. Díaz Ordaz llegó a ofrecerle el registro a cambio de frenar el movimiento estudiantil, lo que rechazó la dirigencia argumentando que tal acción estaba más allá de sus posibilidades (Carr, 1996: 262-7). Estos antecedentes del PCM lo hacían un partido ideal para procesar el descontento de algunos sectores, por muy intenso que fuera, en posiciones moderadas.

En ambos casos, la coalición autoritaria ofreció un sistema electoral con elementos proporcionales apenas suficientes para incentivar la participación opositora. Los escaños de los respectivos niveles de lista estaban de hecho reservados para los partidos de oposición, no serían disputados por el PRI. En el primero de ellos, el número de escaños reservados era de un mínimo de 15, tomando en cuenta que para 1964, el sistema de partidos se había estabilizado en uno hegemónico y tres periféricos. Con alcanzar una votación nacional de 2.5 por ciento (que en 1971, se redujo a 1.5 por ciento), un partido pequeño obtiene cinco escaños y uno adicional por cada 0.5 por ciento de la votación, de tal forma que el total de escaños reservados dependía del desempeño electoral de cada partido, con un má-

ximo de 60 a 75 escaños, según la legislación anterior y posterior a 1971, respectivamente. Esto cambió con la reforma de 1977, cuando el número de escaños reservados quedó fijo en 100 frente a 300 CUNs.

Para participar en el reparto proporcional, los partidos debían llenar un "requisito de debilidad". En los términos del sistema de 1963, sólo obtendrían escaños en el nivel de lista de los partidos que obtuvieran menos de 20 triunfos en las CUNs (25 de 1971), y el total de escaños que tales partidos podrían obtener sumando los niveles de lista y nominal era de 20 a 25. En 1977, se estableció que sólo participarían en el reparto proporcional los partidos que obtuvieran menos de 60 triunfos en las CUNs. Ambas cláusulas no sólo excluían con toda seguridad al PRI (de ahí que se tratara de escaños reservados), sino que además, protegían a dicho partido contra la posibilidad de que otro creciera demasiado y se ayudara de la representación proporcional para disputarle la hegemonía.

Finalmente, una diferencia importante se debe a distintos objetivos con respecto a la oposición. El sistema de "diputados de partido" quería al mismo tiempo propiciar la participación del PAN, e incentivar su cobertura de candidaturas en el nivel nominal. El primer objetivo fue atendido con los escaños reservados, mientras que el segundo se abordó mediante la conformación de las listas de los partidos. Los escaños por representación proporcional correspondientes a cada partido minoritario serían asignados a los candidatos no ganadores en las CUNs de cada partido, en orden decreciente de número de votos obtenidos. De esta forma, el reclutamiento de candidatos se facilitó porque perder en la CUN no ponía fin a la carrera por acceder a la representación, y el esfuerzo en la campaña, aunque no resultara en la derrota del adversario (priísta), se reflejaba en las posibilidades de obtener un buen lugar en la lista. Los incentivos funcionaron en la dirección esperada, pues para las elecciones de 1964, no hubo candidaturas únicas, ni las habría más. Entre esa fecha y las elecciones de 1973, el PAN presentó candidatos en al menos 170 circunscripciones, y en 1976, cuando la crisis interna del PAN lo dejó sin candidato a la presidencia, su cobertura de candidaturas en las CUNs fue de 68.9 por ciento, en todo caso superior a la de 1961.<sup>11</sup>

En la reforma electoral siguiente, en cambio, se utilizaron listas cerradas de partidos que recibirían escaños en función de sus votos en cinco

<sup>11</sup> Cifras de Molinar (1991: 72)



circunscripciones plurinominales (CPNS) regionales. La fórmula electoral escogida, la "primera proporcionalidad", tenía como propiedad característica un sesgo a favor de los partidos pequeños a costa del partido más grande de los que participan en el reparto (Weldon, 2001: 451). Esta propiedad al mismo tiempo que limitaba las posibilidades de crecimiento del PAN, incrementaba el atractivo para los partidos que, como el PCM, se iniciaban en la arena electoral con una incertidumbre muy alta sobre su capacidad de obtener votos. Así, por ejemplo, en las elecciones de 1985, participaron en el reparto proporcional ocho partidos. De la votación conjunta de estos partidos, la correspondiente al PAN representó el 47.4 por ciento, pero la fórmula de primera proporcionalidad le asignó 32 de 100 escaños, lo que significa una subrepresentación de 15.4 puntos. Todos los demás partidos fueron sobre representados en el nivel de lista, desde un mínimo 1.13 puntos (PMT) a un máximo de 3.61 puntos (PPS).<sup>12</sup> Este sesgo en contra del partido más grande de la oposición presenta al mismo tiempo un incentivo para que los demás partidos permanezcan separados, pues si la suma de sus votos rebasa a la votación panista, obtienen más escaños compitiendo cada uno por su lado que presentando una lista única.<sup>13</sup>

La siguiente ronda de reformas al sistema electoral (1986), presenta un cambio con respecto a las intenciones de la coalición autoritaria. La famosa cláusula de gobernabilidad, por la que la lista del partido con mayor número de triunfos en las CUNs y menos del 51 por ciento de la votación recibe escaños hasta que el partido sume la mayoría absoluta por ambos niveles, responde a la preocupación de la nueva élite tecnocrática por la viabilidad de sus reformas económicas en un momento en que las tendencias estructurales de la sociedad (asociadas con la modernización del país) hacían prever para 1988, una caída en la votación priista por debajo del 60 por ciento (Molinar, 1991: 137-46, 158-70). Si a esto se suman los efectos de la crisis de mediados de los ochenta, entonces es posible decir que el problema no era ya las consecuencias del descontento sin expresión electoral, sino las consecuencias electorales del descontento.

<sup>12</sup> Cálculos propios con base en datos del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados.

<sup>13</sup> El sesgo desfavorable al PAN de la primera proporcionalidad fue notado por este partido desde la discusión de la reforma en la Cámara de Diputados, cuando un diputado panista la calificó de "odiosa" en el sentido que el derecho romano daba al término: una ley contraria a una persona específica (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 129-30).

El nuevo sistema estableció, junto con las 300 CUNs, una "bolsa" de 200 escaños con dos objetivos. El partido más grande si obtenía menos del 51 por ciento de los votos tomaba de la bolsa tantos escaños como necesitara para reunir 251, y si obtenía entre 51 y 70 por ciento, los que fueron necesarios para que su representación en la cámara igualara a su porcentaje de votación. Este premio a la mayoría fue conocido en México como "cláusula de gobernabilidad". El resto de escaños de la bolsa serían asignados por representación proporcional a los demás partidos, mediante primera proporcionalidad.

A cambio de esta certidumbre en la que el PRI obtendría una mayoría absoluta de escaños (natural o artificial), la oposición recibió un incremento de 50 escaños en el número de escaños reservados, pues la nueva legislación estableció que el partido más grande sólo podría recibir hasta el 70 por ciento de la cámara (350), aunque su votación fuese mayor. Estos 150 escaños representaban un mínimo, pues podían ser más (potencialmente, hasta 249), dependiendo de su desempeño electoral.

En estas tres reformas al sistema electoral la coalición autoritaria dispuso de diseños que le eran claramente favorables. Las diferencias más importantes entre los sistemas se deben a que en los primeros dos, el objetivo era revertir los efectos mayoritarios en un esquema de competitividad electoral muy baja o casi nula, mientras que la cláusula de gobernabilidad fue una medida de la coalición autoritaria para proteger a su partido contra los efectos de una competitividad futura predeciblemente alta. En los tres casos, el PRI disponía de los escaños necesarios para realizar por sí mismo las reformas constitucionales necesarias e imponer su sistema electoral preferido. La oposición, por su parte, no tuvo más remedio que aceptar los sistemas electorales que se les presentaban, pues los tres diseños contenían, con la introducción de elementos proporcionales y un mínimo de escaños reservados, los incentivos suficientes para descartar la alternativa de abandonar el juego.

## LOS SISTEMAS DE 1991, 1994 Y 1997. MODELO DE NEGOCIACIÓN EFECTIVA

A partir del descalabro electoral de 1988, el PRI nunca más podría realizar él solo los cambios constitucionales necesarios para transformar el sistema electoral. Sin embargo, por diversas razones la coalición autoritaria



creyó necesario insistir en el rediseño. La introducción de la capacidad de veto por parte de la oposición da cuenta del "zigzag" señalado por Molinar (1996: 138) en las reformas de 1991 y 1994, en el sentido de que en cada una coexisten elementos consensuales con elementos mayoritarios.

El PRI en 1989, sentía la necesidad de asegurarse mayorías más holgadas en la cámara baja, pues un defecto de la legislación anterior es que le quedaba muy "ajustada". Existe la hipótesis de que en ese año el gobierno hizo un esfuerzo por inflar la votación del PRI, con el fin de evitar que posibles defecciones dejaran a este partido en una situación comprometida de cara al Colegio Electoral (Molinar, 1991: 241-2). Si éste hubiese obtenido menos de la mayoría absoluta de votos, su representación habría quedado en 251 escaños, y cada uno de sus diputados en lo individual habría sido capaz de acabar con la mayoría absoluta priista.

El PRI, presentó una iniciativa de reformas que contemplaba un sistema mixto segmentado, en el que todos los partidos participan del reparto proporcional con independencia de sus triunfos en el nivel nominal. La lógica de este cambio es la siguiente: a medida que el partido más grande se aproxima a o rebasa la mayoría absoluta de los votos, un sistema mixto segmentado le proporciona más escaños que el sistema de 1988, el cual le es más ventajoso en un contexto competitivo sin mayorías holgadas (Molinar y Weldon, 2001: 222).<sup>14</sup>

Un ejemplo hipotético hará más claras las diferencias. Con los resultados de las elecciones de 1988, que dieron al PRI el 52.2 por ciento de los escaños con el 51.2 por ciento de los votos bajo las reglas entonces vigentes, un sistema segmentado le habría dado el 57.2 por ciento de los escaños. En cambio, con los resultados de las elecciones de 1997, cuando éste obtuvo el 39.1 por ciento de los votos, un sistema segmentado lo habría dejado con 245 escaños, mientras que el sistema de 1988, le habría atribuido esos seis escaños necesarios para la mayoría absoluta.

Tanto el Partido Popular Socialista (PPS)<sup>15</sup> como el Partido Mexicano Socialista (PMS), ya en vías de constituirse en PRD, se manifestaron por un

<sup>14</sup> Nótese que en las transiciones de los países de Europa del Este en las que los partidos comunistas mantenían el control del proceso (Bulgaria, Hungría) éstos adoptaron sistemas electorales segmentados como aquellos que al mismo tiempo les permitirían obtener la mayoría de escaños y satisfacer parcialmente las demandas de la oposición (Elster, Offe y Preuss, 1998: 112-4).

<sup>15</sup> Las posturas de los partidos en torno al sistema electoral fueron tomadas de Valdés (1993: 87-90 y 94-99).

sistema de representación proporcional puro que igualara la proporción de escaños de cada partido con su proporción de votos. El Partido del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional (PFCRN) pidió un sistema de representación proporcional en CPNs grandes, constituidas por cada entidad federativa. El PAN propuso un sistema mixto compensatorio cuyo nivel de lista estuviese constituido por 150 escaños, excluyendo del reparto a los partidos que ganaran un número de CUNs que representara una proporción del total de escaños superior a su proporción de votos. Como es muy difícil que el partido más grande no esté sobre representado en las CUNs, para efectos prácticos este sistema actúa en contra de dicho partido en varios escenarios.

82

La figura 1 presenta una simplificación visual de las preferencias de los partidos con respecto a cada propuesta, asumiendo que a mayor proporcionalidad del sistema, más alejado de las preferencias del PRI.

FIGURA 1  
SISTEMAS ELECTORALES PREFERIDOS POR LOS PARTIDOS  
EN UN ESPACIO UNIDIMENSIONAL



De acuerdo con Valdés (1993: 99), la desproporcionalidad del sistema mixto segmentado llevó a la oposición a rechazarlo. En principio, el PRI no puede aprobar por sí mismo su sistema electoral preferido. Sin embargo, su capacidad de veto lo pone en una situación mucho más favorable que la oposición en su conjunto, una vez que tomamos en cuenta el *status quo* (SQ); *i.e.* el sistema electoral vigente con cláusula de gobernabilidad. Si no se llega a un acuerdo, el *status quo* prevalece, y con ello el PRI obtiene una alternativa mucho más cercana a sus preferencias que a las del resto de los partidos.

La relativa indiferencia priísta entre su sistema electoral preferido y la continuación del sistema vigente, junto con su capacidad de veto hacia otras propuestas, redujo las alternativas viables a estas dos. Lo indeseable del sistema electoral prevaleciente por sí mismo debió haber representado un incentivo para la oposición para votar por el sistema mixto segmentado.



Sin embargo, el resultado fue un SQ reforzado, por decirlo de alguna manera ya que otorgaba a la lista de partido más grande que obtuviera entre 35 y 60 por ciento de los votos tantos escaños como fueran necesarios para que este partido sumara 251 escaños más dos escaños adicionales por cada punto porcentual de votación por encima del 35 por ciento. Es decir, el sistema se sitúa en un punto medio entre la propuesta priísta y SQ, en el sentido de que compensaba parcialmente las limitaciones que el sistema de 1988, imponía al partido con mayoría absoluta de votos. El veto panista apenas se refleja en el sistema electoral escogido, sobre todo tomado en cuenta que en éste persiste la absoluta seguridad de que el PRI, puede convertir una mayoría simple de votos en una absoluta de escaños.

Para entender este resultado, debemos centrarnos en dos aspectos de la negociación. Uno de ellos, la reducción de la capacidad negociadora del conjunto de la oposición debida a su dispersión; el otro, la posibilidad de realizar pagos colaterales. Si la oposición hubiese presentado una posición única, no habría tardado en apoyar la propuesta priísta, con el fin de evitar el sistema con prima de mayoría. Sin embargo, la oposición comenzó por rechazar la única oferta viable frente al *status quo*, error estratégico que dio pie a las negociaciones directas entre el gobierno y el PAN.

El PAN, aceptó la cláusula de gobernabilidad a cambio de un pago colateral, no reflejado directamente en el sistema electoral, pero sí en cuanto a mejoras en la calificación y la organización de las elecciones. Muy a grandes rasgos, el PAN obtuvo: condiciones más restrictivas para que el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados revirtiera las decisiones del nuevo Tribunal Federal Electoral y la introducción de la figura de "consejeros magistrados" en la dirección del Instituto Federal Electoral, en principio ciudadanos independientes con respecto a los poderes y a los partidos, en número tal que eliminaban la mayoría que el PRI-gobierno se aseguraba bajo las reglas de composición de la anterior Comisión Federal Electoral.

Esto fue posible gracias a que los principales interlocutores, el gobierno y el PAN, se situaron en dos "pistas" distintas. Para el gobierno, lo más importante era, en el corto plazo, obtener una mayoría absoluta. Para el PAN, en cambio, lo más importante fue garantizarse las condiciones para que su triunfo en el mediano o largo plazo fuera respetado. La diferencia de las dimensiones temporales de los interlocutores hizo de la negociación un juego de suma positiva.

En 1993, el PRI insistió en promover el mismo sistema electoral que en la ocasión anterior, esta vez con éxito y en forma consistente con el modelo expuesto en la figura 1. El sistema segmentado mantendría la división 300/200, pero ahora todos los partidos participarían, con las mismas reglas, en la distribución de los escaños por lista, con base en sus votos nacionales. La participación del PRI en el reparto proporcional determinó sin duda la eliminación de la primera proporcionalidad, que le habría sido adversa, y su sustitución por la fórmula Hare.

El sistema segmentado es en sí mayoritario, y mucho. Como dicen Molinar y Weldon, la diferencia del nuevo sistema con relación al anterior es que aquél "no asegura una mayoría absoluta, pero producirá una en muchos casos" (2001: 220). De hecho, este sistema electoral dio al PRI en las elecciones de 1994, 300 escaños (el tope de 60 por ciento) con el 50.3 por ciento de los votos, mientras que el sistema de 1991, le habría otorgado 15 escaños menos. El PAN, en cambio, perdió cinco escaños con el cambio de sistema electoral que aprobó. El PRI, entonces, se procuró un sistema que le era favorable en los escenarios electorales inmediatos más probables. Sin embargo, introdujo un elemento de incertidumbre incompatible con la prima de mayoría.

Adicionalmente, el máximo de escaños que un partido podría ganar, pasó de 350 a 315, en términos absolutos, y 300 cuando ningún partido alcanzara el 60 por ciento. Si el máximo de 350 únicamente aseguraba que siempre habría escaños para los partidos pequeños, el nuevo tope asegura que siempre habrá un actor de veto en lo que se refiere a la reforma constitucional, aunque el partido más grande reciba dos tercios de los votos o más. Con esta disposición, el PAN se garantizó un lugar en las decisiones fundamentales a cambio de aceptar un sistema electoral que, en comparación con el anterior, incrementaba la representación priísta.

En enero de 1994, la rebelión zapatista dio a la oposición una mayor capacidad de veto, dado que para la coalición autoritaria su falta de acuerdo con los resultados electorales representaría una situación explosiva. Sin embargo, este veto incidió mucho en la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), desapareciendo la representación de los partidos y creándose la figura de los "consejeros ciudadanos", electos por consenso entre los tres partidos más grandes, pero no se reflejó en el sistema electoral. Es posible que en la redacción del "Pacto por la Paz, la Justicia y la Democracia" que rigió la orientación de las reformas, la opo-



sición haya calculado que la sobre representación que producía el sistema electoral vigente debió haber sido la base sobre la que el PRI estaba dispuesto a aceptar elecciones más limpias y encontrar un sistema alternativo que no derrumbara esa base y al mismo tiempo se acercara a las preferencias opositoras, habría sido un proceso engorroso. También, es posible que la oposición haya participado de un sentimiento común en los meses de enero y febrero; a saber, que la guerrilla en Chiapas y la actividad del negociador del gobierno Manuel Camacho Solís, debilitaban la campaña presidencial de Luis Donald Colosio, lo que haría más probable la ocurrencia de los escenarios en los que las reglas prevalecientes perjudicaban al PRI.

Con los resultados de las elecciones de 1994, el sistema electoral parecía haber llegado a un equilibrio, en el sentido de que el partido beneficiado (el PRI) contaba con una representación suficiente para obstaculizar cualquier intento de cambio. La insistencia de Zedillo en que la reforma electoral "definitiva" consistiría en el financiamiento de las campañas y el acceso a los medios de comunicación (Becerra, Salazar y Woldenberg, 2000: 372-6), confirman esta impresión. Sin embargo, la crisis de 1995, acabó con estas esperanzas de transitar de un sistema de partido hegemónico a uno de partido dominante (Sartori, 1999) con ayuda del sistema electoral, por lo que Zedillo convocó a una nueva ronda de negociaciones. Aunque formalmente al PRI, le bastaba el voto de cualquiera de los dos partidos principales de oposición para reformar la Constitución en posición ventajosa, las negociaciones entre los tres partidos se rigieron por la regla de unanimidad, de tal forma que cada uno de ellos podía vetar las propuestas contrarias a sus preferencias. Esto obedeció a que el régimen era vulnerable a la capacidad de los partidos de oposición para denunciar resultados fraudulentos. De hecho, durante los muchos meses que duraron las negociaciones, el PRD y el PAN se retiraron de la mesa en distintos momentos por causa de conflictos electorales locales, obteniendo mayores concesiones al presentar un adelanto de los comportamientos que el gobierno quería evitar en las elecciones federales de 1997. Finalmente el PAN y el PRD, potenciaron su posición al unificar sus demandas.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Para una relación pormenorizada de este proceso de negociación, véase Becerra, Salazar y Woldenberg (2000: 376-423).

El resultado de la dinámica de vetos mutuos que adoptó la negociación se reflejó en todos los órdenes: los poderes Ejecutivo y Legislativo ya no intervendrían en la organización de las elecciones, la calificación electoral fue incorporada al poder judicial y el sistema electoral sufrió una reforma importante.

El carácter segmentado del sistema se mantuvo, pero se puso un tope de ocho puntos a la sobre representación que cualquier partido podía obtener con respecto a su porcentaje de votos. Inicialmente el PRI, pedía una sobre representación máxima de 10 puntos mientras que la oposición propuso una sobre representación nula, para después moverse hacia cinco puntos. El PRI, habría terminado aceptando el máximo de ocho puntos porque las encuestas le asignaban entre 42 y 45 por ciento de votación (Molinar y Weldon, 2001: 226). Este tope limita fuertemente el carácter mayoritario del sistema electoral,<sup>17</sup> y para obtener la mayoría absoluta de escaños un partido debe obtener como mínimo el 42.2 por ciento de la votación y al menos 167 escaños en las CUNs (Molinar y Weldon, 2001: 225-6).

Estas restricciones en las condiciones que darían lugar a la formación de mayorías artificiales hacen que por esta ocasión, el diseño específico ya no represente el "mínimo aceptable" para una oposición muy débil, sino que fue el mínimo aceptable para un partido hegemónico en franco declive. Si las dos primeras reformas con negociación explícita resultaron en sistemas electorales que favorecían a un partido hegemónico electoralmente fuerte, en la última, la menor capacidad negociadora de la coalición autoritaria fue aprovechada por la oposición no para cambiar el sistema electoral hacia uno enteramente proporcional, sino para introducir un mecanismo (el tope de 8 por ciento) que circunscribe y limita la capacidad del partido más grande para obtener mayorías artificiales mediante la sobre representación.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> De acuerdo con mis estimaciones, en el grupo de regímenes autoritarios en los que el partido en el poder no alcanza la mayoría absoluta de los escaños, el sistema electoral da a dicho partido una sobre representación mediana de ocho puntos.

<sup>18</sup> Las elecciones de 1997 y 2000 no arrojaron mayorías absolutas en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en ninguno de estos casos intervino el máximo de ocho por ciento a la sobre representación. Los sistemas de 1991 y 1988 habrían asegurado una mayoría absoluta al primer partido, pero el de 1994 no habría producido una sobre representación suficiente en contextos tan competitivos. Sin embargo, hay que mencionar que en 1997 el PRI obtuvo 165 de 300 escaños en el nivel nominal, lo que prueba que la introducción de elementos proporcionales representa, más allá de las ganancias explicadas en la



## CONCLUSIONES

El recorrido realizado por esta serie de reformas nos permite incorporar un factor que da cuenta de los objetivos de la coalición autoritaria al reformar el sistema electoral, que es su actitud frente a la competencia electoral. Hasta 1994, el PRI siempre obtuvo como mínimo la mayoría absoluta de los votos. Pero la actitud en cada reforma fue hasta cierto punto distinta. En las primeras dos reformas, cuando esta votación se elevaba por encima del 80 por ciento, el objetivo de las mismas fue proteger a la oposición contra su propia debilidad, aunque en forma bastante conservadora si se toman en cuenta los mecanismos en contra de su crecimiento.

Los sistemas electorales de 1988 y 1991, con cláusula de gobernabilidad son la expresión de la aversión al riesgo electoral mostrada por la coalición autoritaria frente a las consecuencias de la modernización de la sociedad mexicana. El sistema segmentado de 1994, por su parte, da cuenta de una mayor seguridad por parte de dicha coalición para competir asumiendo mayores niveles de riesgo, seguridad que fue confirmada con los resultados electorales de ese año.

Aunque las elecciones de 1997, ya no arrojaron una mayoría absoluta electoral, la reforma previa tampoco se relaciona con la disposición al riesgo de la coalición autoritaria. La crisis económica de 1995, y las medidas impopulares que la administración de Zedillo se vio obligada a realizar para superarla, dieron a la oposición la capacidad de iniciativa que los resultados electorales previos no le habrían permitido (aunque tampoco la debilidad absoluta de los años sesenta y setenta). Es por eso que la reforma de 1995-1996, ya no puede ser considerada como una variable de la liberalización autoritaria planteada en la primera parte de este artículo. Si el sistema segmentado creado para las elecciones de 1994, aún hacía probable la formación de mayorías artificiales para el partido en el poder a la vez que presentaba a la oposición incentivos para no abandonar el juego, el máximo de ocho puntos a la sobre representación está muy lejos de ser una garantía para la coalición autoritaria. El objetivo de la reforma (frenar la capacidad del PRI para obtener mayorías absolutas) y los mecanismos extraelectorales de negociación aún suponen un régimen autoritario, pero el resultado institucional no es ya un respaldo para ese tipo de régimen.

---

primera parte de este ensayo, un serio riesgo para la coalición autoritaria (como toda medida de liberalización, dicho sea de paso).

CUADRO 2  
DINÁMICA DE REFORMA AL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

Reforma	Recursos		Objetivo	Resultado
	Oposición	PR/ Gobierno		
1963, 1977	Debilidad electoral y organizativa	Mayoría calificada en el Congreso	Otorgar espacios a oposición casi inexistente	Sistema electoral preferido por la coalición autoritaria
1986			Proteger al partido hegemónico contra crecimiento electoral de la oposición	
1989		—Capacidad institucional de veto —Indiferencia frente a <i>status quo</i>		—Segunda preferencia de la coalición autoritaria —Pagos colaterales en cuanto a organización y calificación de elecciones
1993	—Capacidad institucional de veto —Oposición desunida		Incrementar sobre representación del PRI	—Primera preferencia del PRI —Incertidumbre en sistema electoral —Imposibilidad de mayoría calificada
1995	—Oposición unida en negociaciones —Capacidad de veto debida a recursos organizativos	—Mayoría absoluta —Actitud defensiva	Limitar sobre representación del PRI	—Opción intermedia entre las primeras preferencias de PRI y oposición —Límites a mayorías absolutas mediante sobre representación



El cuadro 2 presenta un resumen de la relación entre recursos y objetivos de los actores, por un lado, y resultados institucionales en el proceso de reformas al sistema electoral mexicano.

## BIBLIOGRAFIA

- BECERRA, RICARDO, PEDRO SALAZAR y JOSÉ WOLDENBERG (2000), *La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y reformas*, México, Cal y arena.
- CARR, BARRY (1996), *La izquierda mexicana a través del Siglo xx*, México, Era.
- COLOMER, JOSEP M. (2000), *Strategic transitions. Game theory and democratization*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.
- \_\_\_\_\_ (2001), *Instituciones políticas*, Barcelona, Ariel.
- COX, GARY W. y MATTHEW D. MCCUBBINS (2001), "The institutional determinants of economic policy outcomes", en Stephan Haggard y Matthew D. McCubbins (eds.), *Presidents, parliaments, and policy*, Nueva York, Cambridge University Press, pp. 21-63.
- DIAMOND, LARRY (2002), "Thinking about hybrid regimes", *Journal of Democracy*, 13/2, abril, pp. 21-35.
- ELSTER, JON, CLAUS OFFE y ULRICH K. PREUSS, con Frank Boenker, Ulrike Goetting y Friedbert W. Rueb (1998), *Institutional design in post-communist societies. Rebuilding the ship at sea*, Cambridge, Cambridge University Press.
- GARRIDO, LUIS JAVIER (1982), *El partido de la revolución institucionalizada. La formación del nuevo Estado en México (1928-1945)*, México, Siglo XXI.
- HARDIN, RUSSELL (1989), "Why a constitution?", en Bernard Grofman y Donald Wittman (eds.), *'The Federalist Papers' and the new institutionalism*, Nueva York, Agathon Press, pp. 100-20.
- KNIGHT, JACK (1992), *Institutions and social conflict*, Nueva York, Cambridge University Press.
- LIJPHART, AREND (1994), *Electoral systems and party systems. A study of twenty-seven democracies, 1945-1990*, Oxford, Oxford University Press.
- LINZ, JUAN J. (1982), "Funciones y disfunciones de las elecciones no competitivas: los sistemas autoritarios y totalitarios", en Guy Hermet, Alain

Rouquié y Juan J. Linz, *¿Para qué sirven las elecciones?*, México, FCE, pp. 90-146.

\_\_\_\_\_ y ALFRED STEPAN (1996), *Problems of democratic transition and consolidation. Southern Europe, South America, and post-communist Europe*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.

LUJAMBIO, ALONSO e IGNACIO MARVÁN LABORDE (1997), "La formación de un sistema electoral 'netamente mexicano'. La reforma de los 'diputados de partido', 1962-1963", *Diálogo y Debate*, 1, abril-junio, pp. 41-75.

MOLINAR HORCASITAS, JUAN (1991), *El tiempo de la legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en México*, México, Cal y arena.

\_\_\_\_\_ (1996), "Changing the balance of power in a hegemonic party system: The case of Mexico", en Arend Lijphart y Carlos H. Waisman (eds.), *Institutional design in new democracies. Eastern Europe and Latin America*, Westview Press, Boulder, pp. 137-159.

\_\_\_\_\_ y JEFFREY A. WELDON (2001), "Reforming electoral systems in Mexico", en SHUGART y WATTENBERG (eds.), pp. 209-230.

MORLINO, LEONARDO (1991), voz Estabilidad política, en Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino (eds.), *Diccionario de política*, México, Siglo XXI, pp. 533-41.

NACIF, BENITO (1996), Electoral institutions and single party politics in the Mexican Chamber of Deputies, Documento de Trabajo núm. 48, División de Estudios Políticos, CIDE.

NEGRETTO, GABRIEL L. (2001), "Procesos constituyentes y distribución de poder: la reforma del presidencialismo en Argentina", *Política y Gobierno*, VIII/1, primer semestre, pp. 117-166.

NOHLEN, DIETER (1998), *Sistemas electorales y partidos políticos*, 2a. ed., México, FCE.

ODIHR [Office for Democratic Institutions and Human Rights] (varias fechas), "Election reports", [www.osce.org/odihr/documents/reports/election\\_reports](http://www.osce.org/odihr/documents/reports/election_reports).

O'DONELL, GUILLERMO y PHILIPPE C. SCHMITTER (1994), *Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*, Barcelona, Paidós.

PRZEWORSKI, ADAM, MICHAEL ALVAREZ, JOSÉ ANTONIO CHEIBUB y FERNANDO LIMONGI (2000), *Democracy and development. Political institutions and well-being in the world, 1950-1990*, Cambridge, Cambridge University Press.



- SARTORI, GIOVANNI (1999), *Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis*, 2a. ed., Madrid, Alianza.
- SCHEDLER, ANDREAS (2002), "The menu of manipulation", *Journal of Democracy*, 13/2, abril, pp. 36-49.
- SHUGART, MATTHEW SOBERG y MARTIN P. WATTENBERG (2001), "Mixed-member electoral systems: A definition and typology", en Shugart y Wattenberg (eds.), pp. 9-24.
- SHUGART, MATTHEW SOBERG y MARTIN P. WATTENBERG (eds.) (2001), *Mixed-member electoral systems. The best of both worlds?*, Nueva York, Oxford University Press.
- VALDÉS, LEONARDO (1993), "Las consecuencias políticas de las reformas electorales en México: 1978-1991", tesis de doctorado, México, El Colegio de México.
- WELDON, JEFFREY A. (2001), "The consequences of Mexico's mixed-member electoral system, 1988-1997", en Shugart y Wattenberg (eds.), pp. 447-476.
- ZERMEÑO, SERGIO (1996), *La sociedad derrotada. El desorden mexicano de fin de siglo*, México, Siglo XXI.